

**ALEJANDRO
WERNER**

El paquete económico 2026 del gobierno busca reducir déficit con fuerte austeridad, priorizando pensiones y generando riesgo de presión social.

2026: ¿pueblo o mercados?

En los próximos días el Gobierno Federal enviará al Congreso su propuesta de paquete económico para 2026. Esta propuesta incluye la Ley de Ingresos, la Miscelánea Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios Generales de Política Económica.

Estos documentos contienen la estimación realizada por la Secretaría de Hacienda de los ingresos públicos para el año 2026, las modificaciones propuestas a los diferentes impuestos, el objetivo de déficit público y límite de endeudamiento para el año y el nivel máximo de gasto que se planea ejercer y su distribu-

ción entre los diferentes rubros y programas. Para realizar estas estimaciones y fijar estos objetivos el gobierno plantea sus supuestos sobre las principales variables macroeconómicas, como son el crecimiento, la inflación, el tipo de cambio, tasas de interés y precio del petróleo.

Uno de los temas más importantes a observar en la propuesta del gobierno es si se respetará el compromiso de reducción de déficit para el año 2026 anunciado en el paquete económico para 2025. Recordemos que durante el último año de la administración anterior se tuvo un déficit público de 6 por ciento del producto, el más alto de las últimas décadas.

Por ello, fue importante para el gobierno actual mandar una señal clara de ortodoxia a los mercados financieros que el déficit público regresaría a los niveles registrados antes del incremento observado en 2024.

Para ello se planteó una estrategia en dos etapas con una reducción del déficit de 2 puntos porcentuales del producto en 2025 y uno más entre 2026 y 2027, para llevar este déficit a 3 por ciento del PIB. Una pregunta importante es si se mantendrá este objetivo. Lo más probable es que así sea.

Sin embargo, para cumplir con esta reducción del déficit, el gobierno continuará con una de las políticas de gasto público más restrictivas de las últimas décadas. Por ejemplo, a julio de este año la reducción del gasto público, sin tomar en cuenta el pago de intereses, fue de 6 por ciento en términos reales.

Viendo los diferentes componentes del gasto, de acuerdo con la clasificación funcional, el único rubro que exhibe un crecimiento importante es el de protección social que se incrementa en 6 por ciento real, explicado casi exclusivamente por el gasto en pensiones. El gasto en salud cae

en 8 por ciento en términos reales, el de educación 2 por ciento, vivienda 5 por ciento, seguridad nacional 21 por ciento y así podemos seguir. Para 2025 casi 50 por ciento del gasto se destinará a intereses, participaciones y pensiones. De acuerdo con estimaciones presentadas por la SHCP se anticipa que el gasto, excluyendo intereses, siga cayendo en términos reales en 2026 y que a partir de 2027 crezca, pero menos de lo que aumentará el gasto en pensiones, por lo que el resto de sus componentes no tendrán espacio para crecer.

El gobierno se encuentra entre la espada y la pared, o le falla a los mercados y debilita la percepción de solvencia fiscal o le falla a la sociedad disminuyendo la disponibilidad y calidad de los servicios públicos. La mayor eficiencia recaudatoria que está logrando esta administración ha ayudado a que este problema no sea mayor, pero claramente no es suficiente. En el diseño del presupuesto el gobierno podría recurrir a supuestos optimistas del crecimiento económico y del precio y plataforma de petróleo, lo cual ayudaría a generar mayores ingresos presupuestarios “de papel”, pero tampoco resuelve el problema.

La salida a esta disyuntiva es una reforma fiscal que le permita al gobierno mantener la salud de las finanzas públicas y aliviar las carencias en los servicios públicos esenciales y en el gasto en desarrollo económico que se están acumulando con estas políticas de ajuste al gasto. Eventualmente, esta situación generará presiones sociales, ya que mien-

tras las pensiones y transferencias ayudan a aumentar el ingreso presente de las familias más necesitadas, la asfixia presupuestaria elimina las posibilidades de que estas familias continúen su progreso económico y social debido a las carencias educativas, de salud y de infraestructura pública que estarán enfrentando en los próximos años.

El autor es director fundador de Georgetown Americas Institute.